

## **Trump y Cisjordania. El dilema de Israel**

por **Adrià Fortet**



El 29 de julio de 2012, Mitt Romney fue recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén. La conversación representó el colofón de una visita en la que el candidato republicano a la Casa Blanca recaudó más de un millón de dólares y disfrutó del afecto del gobierno y de la población israelí. Aunque no hubo un apoyo electoral explícito, todo el mundo lo interpretó, dentro y fuera de Israel, como un impulso deliberado del primer ministro a la carrera electoral de su viejo compañero de trabajo en Boston Consulting Group.

El 3 de marzo de 2015, Benjamin Netanyahu se dirigió a las dos cámaras del Congreso norteamericano, con mayoría republicana, con un mensaje claro de oposición al acuerdo nuclear iraní al que habían llegado los cinco miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas y Alemania. Esta vez no había ambigüedad posible: el jefe de gobierno israelí hacía el viaje de manera coordinada con los líderes de la mayoría de la Cámara y del Senado, con el objetivo de enfrentarse a la política exterior conducida por la administración demócrata.

La alianza entre el Likud y los republicanos estadounidenses se ha ido haciendo cada vez más evidente en los ocho años de presidencia de Obama. Netanyahu, que nunca se ha entendido con el 44º presidente de los Estados Unidos, ha lamentado privadamente en muchas ocasiones que, en los casi

once años en los que ha ejercido la primera magistratura israelí, jamás ha podido trabajar con una administración republicana con la que compartiría, de manera natural, valores y convicciones parejas sobre la orientación que requiere la política exterior y, más en particular, sobre el mundo árabe.

El 8 de noviembre del año pasado, esta vieja aspiración se hizo realidad cuando, ante la sorpresa de casi todo el mundo, Donald Trump se convirtió en presidente electo de los Estados Unidos. De manera inesperada, los republicanos volvían a la Casa Blanca después de un paréntesis de ocho años, y lo hacían con el compromiso de desplazar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, de no oponerse a la construcción de asentamientos en Cisjordania y de replantear la solución de dos Estados en el caso de que Israel, «aliado natural» en la región, así lo desee.

En este artículo no voy a entrar en las particularidades que separan a Trump de la ortodoxia republicana, ni en las especulaciones sobre el grado de cumplimiento de sus promesas, ni en la posibilidad de que este apoyo pueda verse empañado por otras consideraciones estratégicas, notablemente las relacionadas con Rusia. Presupongo —*that's a big if*, me dicen los amigos ingleses— que la administración republicana que ha asumido hace tres semanas el liderazgo de la primera potencia mundial respetará los compromisos adquiridos y se convertirá, en palabras de Marc Zell, representante de los militantes republicanos que viven en el extranjero, en «la más proisraelí de toda una generación».

Si las cosas avanzan de esta manera, quedará demostrado que había motivos para el entusiasmo apenas disimulado que muchos dirigentes israelíes exhibieron después de aquel martes de noviembre. Pero también implicará que Israel se verá en la tesitura de clarificar su política territorial y sus aspiraciones de futuro, situación que no ha enfrentado desde hace muchos años y que puede tener consecuencias transcendentales en el devenir de la región.

Permitidme una disertación histórica para contextualizar esta afirmación. Después de la Guerra de los Seis Días de 1967, en donde Israel cuadruplicó su extensión territorial, se abrió una fractura ideológica entre la socialdemocracia sionista que gobernaba y la derecha revisionista que era principal fuerza de oposición. Los primeros entendían que los territorios ocupados, con la excepción de Jerusalén, podían ser devueltos, con la condición de alcanzar un acuerdo de paz y de reconocimiento que evitase que la seguridad del Estado judío volviese a estar permanentemente amenazada, como había pasado en los diecinueve años anteriores. Los segundos suscribían esta narrativa en lo que refería a los territorios capturados a Egipto y a Siria, pero no para los que

formaban parte del mandato de Palestina delimitado por la Sociedad de Naciones en abril de 1920, es decir, lo que conocemos popularmente como Gaza y Cisjordania.

El revisionismo reconocía el derecho de los habitantes árabes a continuar viviendo en los territorios palestinos, e incluso estaba dispuesto a aceptar que adquiriesen la nacionalidad israelí si existía el compromiso de reconocer al Estado y de servir en el ejército. Pero negaba rotundamente que aquella gente tuviese derechos nacionales y pudiera constituir un Estado. Si los «árabes de Eretz Yisrael» — como Menachem Begin gustaba de llamar a los palestinos— querían un Estado, entonces tendrían que ir a buscarlo en Jordania, en Egipto, en Siria o en cualquier otro país árabe.

Mientras los perdedores de la guerra se mantuvieron enrocados en la triple negación de Jartum, esta diferencia ideológica no tenía mucha importancia, porque los territorios, si se devolvían, tenía que ser por medio de una negociación que no era querida por ninguna autoridad árabe y que, por lo tanto, no era factible. El entendimiento entre la derecha y la izquierda dentro de Israel, incluso en forma de gobiernos de unidad nacional, no generaba ningún inconveniente, y este paradigma continuó siendo cierto cuando Israel firmó la paz con Egipto en Camp David, ya que dejando de lado a cuatro fanáticos, el revisionismo nunca había tenido problemas para aceptar que el Sinaí no formaba parte de la tierra de Israel. Lo mismo puede decirse de la paz con Jordania (1994) y de la retirada del sur del Líbano (2000), movimientos impulsados por la izquierda que fueron aceptados inmediatamente por el Likud, en la oposición en aquella sazón.

El proceso de Oslo era una cosa bien distinta, porque ponía en duda la pertenencia de Gaza y de Cisjordania a Israel. El Likud se opuso con el apoyo de toda la derecha, y el país experimentó una fractura y una profunda polarización que culminaron con el asesinato de Yitzhak Rabin, en noviembre de 1995, a la salida de una contramanifestación que pretendía demostrar los apoyos sociales de las izquierdas después de que los revisionistas reunieran a casi un millón de personas en una marcha contraria al proceso de paz en Jerusalén.

Fue en este contexto que Netanyahu ganó las elecciones de 1996, cuando la autonomía palestina ya se había puesto en marcha y se había firmado un acuerdo con Jordania que estaba condicionado a los progresos del proceso de paz. La administración Clinton también estaba comprometida con el asunto, Netanyahu tenía una mayoría frágil que le exigía pactar con partidos favorables a continuar por esta senda, y tal suma de elementos lo llevaron a una sutil modificación de sus posiciones. El Likud que él encabezaba continuaba oponiéndose a un Estado palestino, mas el argumento que

utilizaba no era el irredentista, sino el de la seguridad: la PLO era una organización terrorista, nadie podía confiar en ella, y todavía menos entregarle una parte del territorio.

El nuevo paradigma no convenció ni a los sectores más moderados ni a los más extremistas de dentro del gabinete, de modo que el gobierno terminó por colapsar y la izquierda volvió al poder con una mayoría sólida. El Likud no abandonó, sin embargo, el cambio en sus posiciones, un cambio que a pesar de que no tuviera consecuencias prácticas en el corto plazo, el lector advertirá que a la larga reconciliaba las posiciones de la derecha israelí con las de la izquierda —a cambio de paz, pueden devolverse territorios— si se omiten cuestiones relativamente menores como el estatus final de Jerusalén.

Ariel Sharon puso a prueba la solidez de este cambio entre los militantes revisionistas y sus aliados naturales, que incluían a los nacionalreligiosos y, cada vez más, a la inmigración rusa venida a Israel después del colapso de la Unión Soviética. Decidido a definir unilateralmente las fronteras del país, se retiró de Gaza en 2005 y planteó una partición de Cisjordania que tuviese el aval de los Estados Unidos, apelando a las preocupaciones básicas esgrimidas por la izquierda desde hacía dos décadas, como la necesidad de preservar la mayoría demográfica judía en todo el territorio. Finalmente, el Likud se partió por la mitad y Sharon se escindió con 14 diputados y numerosos cuadros para establecer una nueva plataforma. Los que se opusieron a la retirada, encabezados por Netanyahu nuevamente, recuperaron el control del partido, pero conviene recordar un dato: la oposición se vinculó al problema de la seguridad, no al del irredentismo, y desde entonces, pese a las tres guerras que se han librado contra Hamas, la salida de Gaza se ha entendido dentro del Likud como un *fait accompli*.

Dejadme que haga una referencia histórica más antes de volver al presente. 14 de junio de 2009. Hacía seis meses que Barack Obama había asumido la presidencia, y apenas una semana que había hecho una gira por los países árabes, en la que había citado públicamente pasajes del «sagrado Corán», había abogado por un cambio en las relaciones con el mundo musulmán y había evitado visitar Israel. Aquel día, Benjamin Netanyahu, que había recuperado la jefatura del gobierno tres meses antes, culminó el giro ideológico que ya había anticipado en los años noventa: reconoció el derecho de los palestinos a su propio Estado, pero condicionándolo a que se dieran las condiciones de seguridad y de paz requeridas por Israel. Algo que no pasaba entonces, ni pasa hoy, ni pasará en un futuro previsible. Los dos Estados como objetivo ideal, el *statu quo* como remedio provisional con solución de continuidad. Mucha gente en el Likud no lo suscribió, pero nadie lo discutió

abiertamente. Para los que no podían llegar hasta ahí con la ideología, siempre les quedaba el pragmatismo: Israel enfrentaba una administración estadounidense hostil y tenía que adaptarse.

Ahora sí, volvamos al principio, y enlacemos el contenido de esta aproximación histórica con la última afirmación que hemos hecho antes de empezarla: Israel se verá en la tesitura de clarificar su política territorial y sus aspiraciones de futuro, situación que no ha enfrentado desde hace muchos años y que puede tener consecuencias transcendentales en el devenir de la región.

El actual gobierno de Netanyahu se fundamenta en la suma de seis partidos distintos, que le permiten disponer de una mayoría de 66 diputados en un atomizado parlamento de 120 miembros, y difícilmente podrá establecerse combinación diferente alguna porque las únicas dos fuerzas que podrían añadirse al gobierno no están interesadas en ello, una porque desde la oposición está consiguiendo grandes réditos electorales (el Yesh Atid del exministro de Finanzas Lapid) y la otra, el Partido Laborista, porque se encuentra sumido en una crisis profunda y no podría emprender una maniobra como esta sin escindirse en varias partes.

Examinemos, pues, a los partidos que configuran la coalición. Por un lado, hay los partidos ultraortodoxos, que suman 13 diputados y que compartirán cualquier línea política dictada por el primer ministro mientras se respeten las demandas que plantearon para sumarse a la coalición: la financiación para sus escuelas y la exención del servicio militar a los estudiantes de las *yeshivas*. Después hay los 10 diputados del Kulanu del ministro de Finanzas Kahlon, un exmiembro del Likud que se escindió en 2014 para reivindicar una política económica más beneficiosa para las clases populares; los 8 diputados nacionalreligiosos, encabezados por el ministro de Educación Bennett; los 6 diputados «rusos», encabezados por el ministro de Defensa Liberman y, por supuesto, los 30 diputados del Likud de Netanyahu, solar del revisionismo.

Dejando a un lado a los ultraortodoxos, todos los dirigentes de las demás facciones tienen algo en común: han sido militantes del Likud, han colaborado con Netanyahu y se opusieron a la retirada de Gaza en 2005 y, por lo tanto, a la confluencia del planteamiento territorial revisionista con las posiciones de la izquierda que preconizaba el sector de Sharon. Dentro de la coalición, hay una mayoría clara a favor de anexionarse algunas zonas de Cisjordania, y no es muy aventurado afirmar que una parte importante de los diputados aboga por una vuelta al planteamiento irredentista, a una solución de un solo Estado que «rectifique el rumbo y corrija la aberración» del proceso de Oslo. Este sector cuenta con el apoyo del *Jerusalem Post* y aplaude el esquema formulado hace un par de años

por la veterana periodista Caroline Glick en su *One-State Plan for Peace in the Middle East*, obra que fue calificada de «apasionante, bien escrita y bien documentada» por Mike Pence, a la sazón gobernador de Indiana, hoy vicepresidente de los Estados Unidos.

Netanyahu se enfrenta, por lo tanto, a un dilema importante. El ministro Bennett no se equivoca cuando afirma que «en las próximas tres o cuatro semanas tenemos una oportunidad única para explicar a los Estados Unidos qué es lo que Israel quiere». Antes de contárselo a los Estados Unidos, sin embargo, será menester aclararlo en casa. La coalición de gobierno debe decidir si apuesta por mantener el paradigma de Oslo, basado en una solución de dos Estados para garantizar una mayoría demográfica judía a pesar de la renuncia territorial que implica; o si se inclina por una recuperación del planteamiento de un solo Estado, algo que resolvería la preocupación territorial pero que abriría nuevos desafíos relacionados con la gestión de la población palestina y con la vuelta a un escenario de confrontación abierta con la PLO.

Previsiblemente, los movimientos que veremos en las próximas semanas aclararán la hoja de ruta de Israel y condicionarán el enfoque que han de tomar los Estados Unidos en relación con las convulsiones de un Oriente Medio particularmente desgarrado. El destino de Cisjordania, y no el traslado de la embajada que tanto revuelo ha levantado estos días, representa la piedra de toque para analizar el futuro de uno de los conflictos más enquistados del planeta y, adicionalmente, una primera muestra del alcance de las modificaciones que pueden acontecer en el orden mundial durante los próximos años.

Imagen: [HispanTV.com](http://HispanTV.com).

### **ADRIÀ FORTET**



Terrassa, 1994. Graduat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016), actualment està cursant un màster en història contemporània. S'ha especialitzat en geopolítica, relacions internacionals i història de la diplomàcia. També ha treballat com a becari del Grup de Recerca d'Estudis del Franquisme (GREF-CEFID) i ha exercit de tresorer de la secció terrassenca de Jove Cambra Internacional.